



La influencia de la política venezolana en el fortalecimiento del ELN en la región del Catatumbo

Mayor (EJC) Martínez Noguera Carlos Yibier

Artículo para optar al título profesional:

Magister en Seguridad y Defensa Nacionales

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia
2025

| DATOS GENERALES | |
|------------------------------|--|
| Nombre del estudiante | : Mayor (EJC) Martínez Noguera Carlos Yibier |
| Identificación | : 76358432 |
| Programa académico | : Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales |
| Tutor metodológico | : DO. Jonnathan Jiménez Reina |
| Tutor temático | : TC. Maritza Del Rosario Padilla Bueno |
| Fecha de entrega | : 01 de agosto de 2025 |
| Extensión | : 8.000 palabras |

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

La influencia de la política venezolana en el fortalecimiento del ELN en la región del Catatumbo

The influence of Venezuelan politics on the strengthening of the ELN in the Catatumbo region

Martínez Noguera Carlos Yibier ¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la influencia de la política venezolana en el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerando factores políticos, económicos y geoestratégicos. Se plantea que la expansión de este Grupo Armado Organizado (GAO) factores como la permisividad, cooperación e inacción del gobierno venezolano ante la presencia del GAO en el Catatumbo. La metodología se basa en enfoque cualitativo y el diseño exploratorio-descriptivo, con revisión documental de fuentes primarias y secundarias. Mediante el análisis del contenido documental, se buscó identificar patrones y vínculos que relacionen a este grupo con mencionadas políticas. Se determina que ha habido participación o influencia que se pueda tener entre estos dos actores, que generan conflicto al interior del territorio nacional la originalidad de este artículo radica en su enfoque transfronterizo aportando una visión sobre los desafíos asociados a la gestión de fronteras en crisis migratorias por parte de las FF.MM.

¹ Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Candidato a magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. Contacto: Carlos.martinez@esdeg.edu.co.

Palabras clave: Defensa Nacional, Grupos Armados Organizados, Frontera, Políticas de Seguridad

Abstract: This article aims to analyze the influence of Venezuelan policy on the strengthening of the National Liberation Army (ELN), considering political, economic, and geostrategic factors. It is proposed that the expansion of this Organized Armed Group (GAO) is due to factors such as the Venezuelan government's permissiveness, cooperation, and inaction regarding the GAO's presence in Catatumbo. The methodology is based on a qualitative approach and an exploratory-descriptive design, with a documentary review of primary and secondary sources. Through the analysis of documentary content, we sought to identify patterns and links that relate this group to the aforementioned policies. It is determined that there has been participation or influence between these two actors, which generate conflict within the national territory. The originality of this article lies in its cross-border focus, providing insight into the challenges associated with border management in migration crises by the armed forces.

Keywords: National Defense, Organized Armed Groups, Border, Security Policies

Introducción

La región del Catatumbo, situada en el departamento de Norte de Santander, Colombia, es un área que ha sido históricamente conflictiva debido a factores como su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela, su riqueza en recursos naturales y la presencia de cultivos ilícitos. Esta zona se ha convertido en un epicentro de criminalidad organizada, con múltiples actores armados ilegales, principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha consolidado su presencia desde la década de 1960. El ELN a podido expandirse en el territorio aprovechando la débil presencia Estatal en regiones fronterizas como el Catatumbo. Así mismo, debido a que la atención política en Colombia se ha centrado en los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Eje21.com, 2025).

La relación entre el ELN y el gobierno venezolano ha sido un factor determinante para el fortalecimiento y permanencia de esta guerrilla en la frontera. Desde la administración de Hugo Chávez, Venezuela ha servido como refugio para combatientes del ELN, permitiéndoles reorganizarse, entrenarse y acceder a recursos. Zonas fronterizas venezolanas, como el estado Táchira, se han convertido en bases para operaciones ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Aunque la política de Nicolás Maduro niega cualquier apoyo al grupo insurgente, numerosas fuentes nacionales e internacionales evidencian la complicidad de autoridades venezolanas para facilitar las actividades del ELN (Eje21.com, 2025).

Sumado a esto, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional constituyen los principales impulsores del conflicto en el Catatumbo. La región no solo es un bastión para el ELN y disidencias de las FARC, sino también un corredor estratégico para el tránsito de

cocaína hacia el Caribe y América Central. En este contexto, Venezuela juega un papel crucial como santuario y ruta clave para estas organizaciones criminales. Diversos informes internacionales y denuncias de la sociedad civil han documentado la presencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano, y la administración de Maduro ha facilitado el flujo de armas, combatientes y recursos hacia Colombia, permitiendo la continuidad de actividades ilícitas (Mantilla y Feldmann, 2024)

Paralelo a esto, la militarización del conflicto y la ausencia del Estado colombiano han generado una crisis humanitaria que afecta principalmente a comunidades campesinas e indígenas. Este escenario se caracteriza por un aumento de homicidios selectivos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, agravando la vulnerabilidad de la población civil (Amnistía Internacional, 2022). La consolidación del ELN y otros grupos armados ilegales representa una amenaza significativa para la seguridad y la gobernabilidad en la región, dificultando los esfuerzos del Estado para restablecer el orden, especialmente debido a la falta de cooperación efectiva del gobierno venezolano (Ministerio de Defensa, 2022).

El conflicto en el Catatumbo ejemplifica una forma compleja y multidimensional de conflicto social, en el que se entrelazan intereses políticos, económicos e ideológicos. El ELN se caracteriza por mantener una estructura descentralizada compuesta por múltiples frentes rurales y un frente urbano, con un mando central que coordina la insurgencia. El grupo tiene un doble papel en cada país que actúa, en Colombia, mantiene un discurso revolucionario y enfrenta al Estado, mientras en Venezuela coopera con autoridades locales para fortalecer

sus actividades criminales y económicas ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión (Verdad Abierta, 2020).

La expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo ha sido favorecida por la desmovilización parcial de las FARC, el aumento de cultivos ilícitos, la crisis humanitaria y el fortalecimiento de economías criminales. Este grupo ha desplazado a otros actores armados, ampliando su control territorial con impactos regionales por su rol en el tráfico de drogas y migrantes. Su fortalecimiento también responde a factores históricos y sociales, como su vínculo con las comunidades campesinas desde la expansión petrolera de los años setenta (PNUD, 2014). Actualmente, el ELN domina rutas del narcotráfico, ejerce extorsión y regula el paso fronterizo irregular, consolidando su poder mediante una economía ilícita (Verdad Abierta, 2020).

Finalmente, la consolidación de un santuario para grupos ilegales en territorio venezolano facilita su operación con impunidad y su reagrupamiento ante ofensivas militares colombianas. Esta situación genera graves riesgos para la seguridad nacional colombiana, debido al flujo incontrolado de armas, combatientes y recursos, y contribuye a la prolongación del conflicto y la inestabilidad regional (INDEPAZ, 2021; Peña & Gutiérrez, 2020; González, 2021). La compleja dinámica fronteriza demanda respuestas integrales y cooperación internacional para mitigar sus efectos humanitarios y de seguridad.

Por lo anterior, en este artículo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ha influido la política venezolana en el fortalecimiento de los grupos armados en la región del Catatumbo?, para dar respuesta a este interrogante se han propuesto los siguientes objetivos, en primera instancia se identificarán los grupos armados presentes en la región del

Catatumbo y la relación con la política venezolana, seguidamente se analizarán las dinámicas de apoyo logístico, financiero y territorial que han facilitado el fortalecimiento de estos grupos en la frontera colombo-venezolana, luego se determinarán las repercusiones de esta influencia en la seguridad y estabilidad de la región del Catatumbo, para finalmente concluir que el ELN cumple funciones típicas de un proxy: ejecuta acciones violentas y de desestabilización en beneficio de un tercero (la política venezolana), y proporcionar unas recomendaciones en política pública.

Metodología

Este estudio adoptará un enfoque cualitativo con un diseño exploratorio-descriptivo que es adecuado para analizar fenómenos sociales y políticos complejos como el conflicto armado en el Catatumbo y la posible injerencia del gobierno venezolano en el fortalecimiento de grupos armados ilegales. Según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014), el diseño exploratorio-descriptivo permite abordar fenómenos poco estudiados y formular aproximaciones teóricas preliminares que orientan futuras investigaciones, especialmente en contextos complejos o con escasa información sistematizada. Este tipo de investigación permite generar aproximaciones teóricas preliminares, especialmente valiosas en contextos como el Catatumbo, donde las dinámicas ilegales y transfronterizas se desarrollan con escasa documentación oficial.

Para complementar este enfoque, se empleará una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con el fin de identificar rutas de acción estratégicas que permitan a las autoridades y a la sociedad civil construir respuestas eficaces, humanas y sostenibles frente a esta compleja problemática. La aplicación de esta herramienta facilitará

el análisis integral del contexto, orientando la formulación de políticas y estrategias que consideren tanto los riesgos como las potencialidades presentes en la región.

El estudio se apoyará en el análisis de fuentes primarias y secundarias, incluyendo informes de organismos internacionales, documentos oficiales del gobierno colombiano, reportes de *think tanks*, literatura académica y periodismo de investigación. Esta estrategia permitirá identificar información sobre la presencia del ELN y otros grupos armados en el Catatumbo, así como sus posibles vínculos con el Estado venezolano. La investigación se sustentará teóricamente en el concepto de guerras por delegación (*proxy wars*), en las que un Estado apoya a actores no estatales para influir en conflictos ajenos sin intervenir directamente. Este tipo de enfrentamientos se clasifican como “guerras no convencionales”, aunque en ocasiones involucren fuerzas militares tradicionales. Si bien todos los conflictos generan violencia, las guerras por delegación tienden a prolongarse considerablemente debido al suministro continuo de recursos, armas y combatientes, lo que extiende la duración del conflicto mucho más allá de lo que ocurriría si solo participaran los actores locales (Chamorro, 2020).

El análisis contemporáneo de los conflictos armados requiere comprender el fenómeno de las guerras por poderes, conocidas como *proxy wars*, entendidas como aquellas situaciones en las que un Estado o actor externo interviene de manera indirecta en un conflicto, apoyando a un grupo armado local con recursos, entrenamiento, inteligencia o respaldo político, sin involucrarse directamente en el combate. Esta estrategia ha adquirido relevancia en las últimas décadas debido a que permite a los Estados proyectar poder e influencia con menores costos políticos, económicos y humanos, evitando al mismo tiempo

la exposición directa a sanciones internacionales o a la condena de la opinión pública (Mumford, 2013).

Andrew Mumford, en su obra *Proxy Warfare* (2013), sostiene que este tipo de intervención ha evolucionado significativamente desde la Guerra Fría, adaptándose a un escenario global en el que los conflictos son más fragmentados, transnacionales y prolongados. Según el autor, el uso de actores sustitutos permite a los Estados alcanzar sus objetivos estratégicos de manera encubierta, al tiempo que plantea dilemas éticos profundos, pues las consecuencias humanitarias suelen recaer sobre las poblaciones locales mientras el actor patrocinador conserva una distancia calculada respecto al conflicto. Mumford advierte que, aunque esta estrategia sea eficaz en términos militares, tiende a perpetuar la violencia, dificultar la negociación y generar nuevas formas de dependencia y sometimiento.

Desde otra perspectiva, Eli Berman y David A. Lake profundizan en la relación entre los patrocinadores externos y los actores locales, señalando que la efectividad de las guerras por poderes depende en gran medida de la capacidad del actor externo para seleccionar agentes adecuados y, sobre todo, para supervisar su comportamiento. En su obra *Proxy Wars: Suppressing Violence Through Local Agents* (2019), plantean que cuando los intereses entre ambos actores no están alineados, o cuando la supervisión es débil, las consecuencias pueden ser nefastas, generando descontrol, escalamiento del conflicto y afectación a la población civil. En este sentido, los autores subrayan que no basta con ofrecer apoyo logístico o militar, sino que se requiere establecer vínculos de confianza, incentivos adecuados y una estrategia clara de contención de la violencia.

Daniel Byman complementa este análisis al explorar los efectos del patrocinio externo sobre los movimientos insurgentes. En su artículo *Outside Support for Insurgent Movements* (2013), argumenta que el respaldo internacional suele aumentar las capacidades militares y políticas de estos grupos, facilitando su expansión territorial y su legitimación ante ciertas comunidades. Sin embargo, también resalta que este apoyo suele derivar en un aumento de las violaciones a los derechos humanos, en la fragmentación de las autoridades legítimas y en la prolongación del conflicto, pues los insurgentes, al sentirse respaldados, pierden incentivos para negociar una salida pacífica.

Por su parte, Philip H. Gordon ofrece una mirada histórica al fenómeno, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, donde las guerras por poderes se convirtieron en una herramienta clave para que las superpotencias ejercieran control geopolítico sin entrar en confrontación directa. En su artículo *The Concept of Proxy War* (1988), Gordon explica que este tipo de conflictos, si bien evitaban choques abiertos entre potencias, generaban altos costos en los países utilizados como escenarios de guerra, deteriorando sus instituciones, fracturando sus sociedades y generando crisis prolongadas de gobernabilidad. Asimismo, advierte que este modelo ha erosionado los marcos normativos internacionales sobre el uso de la fuerza, generando ambigüedad legal y vacíos de responsabilidad sobre los actos cometidos por los actores sustitutos.

Finalmente, Michael A. Innes, en *Making Sense of Proxy Wars* (2012), edita una recopilación de estudios que abordan esta temática desde múltiples disciplinas. Innes sostiene que las guerras por poderes no deben analizarse únicamente desde una óptica militar o estratégica, sino que es necesario considerar los factores culturales, económicos y sociales

que permiten su reproducción. Según el autor, estos conflictos crean relaciones de poder asimétricas, donde los actores locales, muchas veces cooptados por intereses externos, pierden autonomía sobre sus propias agendas. En este contexto, la población civil queda atrapada en dinámicas de violencia que no controla, mientras el actor externo mantiene un papel ambivalente entre patrocinador y espectador.

La guerra por poderes no solo constituye una herramienta de intervención estatal, sino un fenómeno que transforma los conflictos armados, debilita el derecho internacional y prolonga las crisis humanitarias. En el Catatumbo, informes académicos han documentado la presencia del ELN y su vínculo funcional con el Estado venezolano, lo que evidencia su uso como proxy con fines geopolíticos, estratégicos y militares. Desde la dimensión geopolítica consolidando un corredor de control informal y utilizándolo como mecanismo de presión en coyunturas diplomáticas tensas (Keen, 2020; Álvarez Vanegas, 2019).

De manera estratégica, el ELN funge como aliado en el control de territorios ricos en recursos y rutas del narcotráfico, generando rentas ilícitas y redes clientelares que sostienen al régimen (PARES, 2022; InSight Crime, 2020). Finalmente, en lo militar, este grupo insurgente actúa como un escudo disuasivo que frena operaciones colombianas y como plataforma de entrenamiento y rearme en Venezuela, asegurando su operatividad con relativa impunidad (HRW, 2020; Observatorio de Venezuela, 2023).

En este contexto, se confirma que el ELN opera como un proxy armado al servicio de los intereses de la política de Maduro comprometiendo la soberanía territorial, esta relación busca debilitar a Colombia percibida por la política de Maduro como una amenaza por su alianza con EE. UU., su papel en denuncias internacionales y su presunto apoyo a la

oposición venezolana. Además, ante su desventaja militar y riesgo de sanciones, Venezuela recurre al ELN para generar inestabilidad en zonas fronterizas, dificultar el control estatal colombiano y afectar procesos políticos internos (Gómez y Martínez, 2021).

Grupos armados presentes en la región del Catatumbo y su relación con la política venezolana

El Catatumbo representa un punto estratégico para estos grupos armados posguerrilla, principalmente por su alta concentración de cultivos ilícitos. Según datos de la UNODC, esta región alberga 43.867 hectáreas sembradas con coca, lo que equivale a aproximadamente el 17 % del total nacional. Además, su ubicación es clave por los corredores transfronterizos que facilitan el tráfico ilegal (Fundaredes, 2025).

Durante la primera mitad del siglo XX, el Catatumbo se consolidó como la primera región petrolera de Colombia. No obstante, la explotación del crudo no trajo consigo desarrollo ni bienestar para la población local, pues fue partir de la década de 1970 que diversas guerrillas comenzaron a establecerse en la zona, atraídas por los recursos estratégicos presentes en esta región. En tiempos recientes, los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han intensificado la crisis humanitaria, dejando un saldo de aproximadamente 80 personas muertas y cerca de 20.000 desplazados. Esta situación ha devuelto la atención nacional sobre esta región del noreste colombiano, históricamente golpeada por la violencia de guerrillas, grupos paramilitares y redes del narcotráfico (FORBES, 2025).

El ELN fue el primer grupo insurgente en establecerse en el Catatumbo, marcando un hito con la toma del municipio de Convención en 1979, donde obligó a arriar la bandera nacional para izar la de su organización, en un acto simbólico de control territorial (Fundaredes, 2025). Posteriormente, entre 1986 y 1989, el nororiente del país vivió un periodo de gran avance político, militar y social, impulsado por la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), integrada por el EPL, M-19, ELN, Quintín Lame, PRT y MIR, aunque sin la participación de las FARC.

Si bien estas guerrillas no lograron una plena unificación por sus diferencias ideológicas, sí desarrollaron acciones conjuntas que fortalecieron su capacidad de incidencia y se convirtieron en referente para movimientos políticos de izquierda como la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular. Este proceso también estimuló la movilización de gremios y organizaciones sociales en su oposición al régimen (CEDEMA, 2024).

Las FARC consolidaron su presencia en el Catatumbo hacia mediados de la década de 1990, aunque desde finales de los ochenta ya tenían influencia en algunas zonas, con apoyo de nuevos integrantes locales. Muchos se unieron por afinidades ideológicas, pero otros lo hicieron como una estrategia frente a la pobreza y la falta de oportunidades, pues la pertenencia al grupo les garantizaba condiciones mínimas de subsistencia, como la alimentación (Fundaredes, 2025).

Tras el Acuerdo de Paz de 2016, la retirada de las FARC generó un vacío de poder que fue disputado por el ELN y Los Pelusos (antiguo EPL). Según *Semana* (2025), estas estructuras habrían dividido el territorio: el ELN controlando la zona fronteriza y el área metropolitana de Cúcuta, y el Frente 33 ocupando varios municipios del Catatumbo. Ambos

grupos, aunque con operaciones independientes, presuntamente mantienen pactos para actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y contrabando, con la complicidad de autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas.

En los últimos años, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha buscado consolidar su control territorial en la región del Catatumbo mediante la confrontación directa con otros grupos armados ilegales. Enfrentamientos con disidencias de las FARC, como ‘Los Pelusos’ en 2018 y 2020, redujeron significativamente el poder de estos últimos. Actualmente, el ELN mantiene una ofensiva contra el Frente 33 de las FARC, al que acusa de intentar imponer su dominio en zonas estratégicas. Esta disputa armada por el control de corredores del narcotráfico y zonas de economía ilícita se complejiza aún más al considerar las alianzas transnacionales del ELN (Forbes, 2025).

Diversos centros de pensamiento han documentado nexos del ELN con Hezbollah, Irán y sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas, lo que configura una amenaza híbrida regional. Según Humire (2019), Hezbollah consolidó presencia en Venezuela con apoyo de altos funcionarios del chavismo, como Tareck El Aissami, mediante actividades como lavado de dinero y narcotráfico. En paralelo, InSight Crime (2020) reporta la expansión del ELN en Apure y Zulia, con respaldo o tolerancia de sectores militares. Además, la articulación política entre Teherán y Caracas, reflejada en vuelos secretos y apoyo logístico mutuo, fortalece un eje adverso a la estabilidad hemisférica (Atlantic Council, 2020).

Este entramado ha permitido al ELN operar con mayor impunidad en la frontera colombo-venezolana y acceder a recursos estratégicos bajo control estatal o paraestatal, afectando directamente la soberanía colombiana. A ello se suma que el Catatumbo se ha

convertido en el principal epicentro de cultivo de coca del país, superando regiones como Nariño o Putumayo, lo que lo posiciona como territorio clave para economías ilícitas (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Su ubicación fronteriza lo sitúa en el centro de dinámicas de migración forzada, tráfico de personas, contrabando y presencia de actores armados. La crisis humanitaria del éxodo venezolano ha agudizado esta situación (Ramírez & Torres, 2022). Asimismo, la influencia del Catatumbo se extiende a Cúcuta, como corredor estratégico para migración, contrabando y lavado de activos, conectando con regiones como Chocó, Córdoba, Magdalena Medio y Cesar, lo que refuerza la importancia de controlar este territorio.

En este contexto, el ELN ha consolidado una fuerte presencia en la zona, ejerciendo control social y territorial a través de prácticas violentas como homicidios, secuestros y paros armados. Durante la última década, esta guerrilla se ha transformado en una fuerza de carácter binacional, con vínculos estrechos con el gobierno de Venezuela. Esta relación se ha intensificado a medida que las tensiones diplomáticas entre Colombia y la política de Nicolás Maduro se han incrementado, abriendo espacios de influencia para el ELN en territorio venezolano (InSight Crime, 2024).

El distanciamiento diplomático entre Colombia y Venezuela otorgó al ELN una ventaja estratégica, al generar un vacío de cooperación en seguridad fronteriza que facilitó su libre movilidad y asentamiento en territorio venezolano. En este escenario, el grupo consolidó corredores logísticos y zonas de retaguardia fuera del alcance de operaciones militares colombianas, además de establecer vínculos con actores locales y estructuras cercanas al régimen venezolano. Como resultado, el ELN amplió su presencia territorial y

fortaleció sus filas con ciudadanos venezolanos, reclutados tanto por afinidad ideológica como por necesidad económica, lo que lo convirtió en una guerrilla con capacidad operativa binacional (Paredes & Rodríguez, 2023).

El ELN no solo se ha convertido en un actor clave del conflicto en el Catatumbo, sino también en un instrumento de poder geopolítico para Venezuela. De hecho, en varias ocasiones, el presidente Maduro ha recordado al presidente colombiano Gustavo Petro el papel que desempeña su gobierno como garante de las negociaciones de paz, tanto con el ELN como con la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC (Cueto, 2025).

La principal base de operaciones del ELN se localiza en la frontera con Venezuela, siendo el Catatumbo su plataforma territorial más sólida, pese a la presencia de estructuras en otras regiones del país. Aunque no se puede confirmar que sus acciones respondan directamente a órdenes desde Venezuela, resulta evidente que el grupo busca consolidar su dominio fronterizo, incrementar su capacidad ofensiva y posicionarse como actor clave en futuros diálogos de paz (Cueto, 2025). Frente a este avance, las disidencias de las FARC, debilitadas por su fragmentación interna, podrían acelerar su sometimiento o negociación con el Estado para garantizar beneficios como proyectos productivos o seguridad para sus bases sociales, aunque aún mantienen influencia regional (Wyer, 2024).

Según Cueto (2025) el conflicto armado estaría en el inicio de una nueva etapa, caracterizada por dinámicas de violencia más complejas y con efectos humanitarios más severos, tal como se muestra en la siguiente figura con la presencia de grupos armados en el Catatumbo.

Figura 1.

Grupos armados organizados que hacen presencia en la región del Catatumbo



Nota: Grupos armados organizados que hacen presencia en la región del Catatumbo. (Semana, 2016)

Cabe resaltar que entre 2023 y 2024, la cantidad de miembros en grupos armados ilegales aumentó un 14 %, pasando de 18.334 a 21.201 personas. En particular, el ELN incrementó su fuerza de combate de 5.880 integrantes en 2022 a 6.300 en 2024, consolidando su dominio en áreas estratégicas como el Catatumbo. Este crecimiento ha venido acompañado de una estrategia de expansión territorial que ha desplazado a otros grupos armados y reforzado su control en zonas clave. En esta región, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han provocado más de 100 muertes y el desplazamiento de alrededor de 11.000 personas en las últimas semanas. Según reportes, el ELN ha trasladado combatientes desde Arauca, incluso utilizando rutas por Venezuela, para intensificar su ofensiva en el Catatumbo. Frente a esta crisis, la gobernación de Norte de

Santander declaró la emergencia humanitaria a través de los decretos 0042 y 0043, con el fin de destinar recursos para atender a las más de 20.000 personas desplazadas y brindar asistencia a quienes han resultado afectados. Estas acciones incluyen la entrega de alimentos, medicamentos, colchonetas y ropa para aliviar las consecuencias de la violencia (API, 2025).

El Gobierno nacional ha responsabilizado públicamente al ELN como el principal causante de la crisis en la región del Catatumbo, subrayando su rol en una "cacería sangrienta" que ha dejado decenas de muertos, desplazamientos masivos y afectados a líderes sociales y firmantes de paz (Mazo, 2025). Frente a este panorama, se ha instado a implementar medidas integrales que vayan más allá del despliegue militar. Entre estas se incluyen el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas armadas, la lucha frontal contra la corrupción institucional y la expansión efectiva de la presencia estatal mediante inversiones sociales y planes de desarrollo territorial. Estas acciones también buscan garantizar condiciones de seguridad y recuperación para las comunidades vulnerables del Catatumbo (El Universal, 2025).

Estas estructuras han logrado consolidar sus operaciones no solo por la debilidad institucional del Estado colombiano en zonas periféricas, sino también gracias a una creciente articulación binacional con la política venezolana, que ha permitido a estos grupos encontrar refugio, rutas seguras y respaldo logístico en el territorio extranjero (Human Rights Watch, 2020; Verdad Abierta, 2020).

La militarización ha sido la principal respuesta del Estado colombiano frente al avance insurgente en el Catatumbo, mediante el despliegue de tropas, operaciones ofensivas y refuerzo de la vigilancia fronteriza. No obstante, estas medidas han resultado insuficientes

para frenar la violencia armada y la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando (Fundación Ideas para la Paz, 2023).

A esta situación se suma el uso político de la frontera por parte de la política venezolana, que, pese a negar apoyo a grupos armados colombianos, ha mostrado una tolerancia activa o pasiva frente al accionar del ELN y otras estructuras, según lo documentan organismos internacionales y medios de investigación (Insight Crime, 2023; Verdad Abierta, 2020). Esto ha permitido la consolidación de una estructura binacional insurgente, que opera indistintamente en ambos lados de la frontera y dificulta los esfuerzos del Estado colombiano por recuperar el control territorial y garantizar soberanía plena en esta región estratégica (Human Rights Watch, 2020).

Las consecuencias humanitarias de este fenómeno son alarmantes. De acuerdo con reportes oficiales de la Gobernación de Norte de Santander (2024), entre los años 2023 y 2024 se registraron más de 11.000 personas desplazadas a causa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata. A ello se suman más de 100 homicidios en este mismo periodo, así como un aumento de los casos de reclutamiento forzado de menores, confinamiento de comunidades y restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados (Human Rights Watch, 2020).

El hecho de que estas organizaciones ilegales mantengan alianzas estratégicas con actores estatales o paraestatales venezolanos configura una amenaza transnacional que trasciende las capacidades locales de respuesta. El Catatumbo se ha convertido en un enclave de economías ilícitas, con una infraestructura criminal consolidada que incluye laboratorios de procesamiento de cocaína, rutas de tráfico hacia Venezuela y Centroamérica, pistas

clandestinas y corredores logísticos que operan con apoyo o complicidad de redes corruptas tanto en Colombia como en Venezuela (Insight Crime, 2023; Verdad Abierta, 2020).

Sumado a esto, la militarización del conflicto no ha logrado garantizar la protección de la población civil. En muchos casos, las comunidades han quedado atrapadas entre la presencia de grupos armados y las operaciones militares, sin una estrategia clara de atención integral ni mecanismos efectivos de justicia transicional. El Estado colombiano ha intentado implementar programas de sustitución de cultivos y proyectos de desarrollo rural en la región, pero su alcance ha sido limitado por la inseguridad, la falta de inversión sostenida y la presencia de intereses ilegales que sabotean los procesos comunitarios (Fundación Ideas para la Paz, 2023).

Otro factor para considerar es la fragilidad institucional del Estado venezolano, que ha permitido que extensas zonas fronterizas queden bajo el control fáctico de organizaciones armadas ilegales. Informes de Human Rights Watch (2020) y Insight Crime (2023) han documentado cómo el ELN ha establecido bases, escuelas de entrenamiento y zonas de operación en estados como Apure, Táchira y Zulia, con la anuencia de funcionarios civiles y militares locales. Esta permisividad ha dado lugar a una relación simbiótica en la que el ELN ofrece servicios de control social y seguridad en territorios venezolanos a cambio de protección y libertad de movimiento (Verdad Abierta, 2020).

La convergencia entre actores armados colombianos y la política venezolana ha configurado una red transnacional de violencia organizada, este escenario constituye uno de los principales desafíos para una política de seguridad efectiva en el Catatumbo y para los esfuerzos de paz y estabilización territorial en Colombia (Fundación Ideas para la Paz, 2023).

Ante ello, se requiere una estrategia fronteriza integral que combine inteligencia, cooperación internacional, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y participación comunitaria.

En este marco, el papel de las Fuerzas Militares colombianas debe orientarse hacia un enfoque adaptativo y multidimensional, en el que la defensa del territorio se complementa con labores humanitarias, apoyo al desarrollo y coordinación interinstitucional. La Doctrina Damasco ofrece un avance hacia esa transformación, aunque su éxito dependerá de la articulación con políticas civiles y de una comprensión integral del fenómeno fronterizo (García Pinzón, 2014; Hinestroza Hernández, 2019).

En conclusión, la situación de seguridad en el Catatumbo evidencia la necesidad de replantear las políticas públicas en materia de seguridad nacional y de relaciones exteriores. Mientras persista una alianza de facto entre grupos armados ilegales y sectores de la política venezolana, será inviable una solución sostenible al conflicto en esta zona. El desafío es múltiple: combatir la criminalidad organizada, proteger los derechos de las comunidades afectadas y reconstruir la legitimidad estatal en una región históricamente marginada. Para ello, se requiere una acción decidida, coordinada y sostenida del Estado colombiano.

Apoyo logístico, financiero y territorial que fortalece a estos grupos en la frontera colombo-venezolana

Para abordar este apartado, es importante considerar las complejidades que rodean la frontera colombo-venezolana, es imprescindible analizar las condiciones estructurales, políticas y sociales que han facilitado el fortalecimiento de Grupos Armados Organizados (GAO) en esta zona. Es de resaltar que este fortalecimiento no es producto de un fenómeno

aislado, sino de una serie de dinámicas que han tejido una red logística, financiera y territorial funcional para los grupos armados organizados mencionados anteriormente.

Desde una perspectiva geopolítica, la frontera ha sido entendida no solo como un límite físico entre dos Estados, sino como una construcción simbólica, institucional y estratégica donde confluyen relaciones de poder, disputas por la soberanía y tensiones diplomáticas (Zapata, 2012). Esta concepción de la frontera se ha visto amplificadas por un enfoque westfaliano de seguridad, que privilegia la militarización frente a los desafíos transnacionales, como el crimen organizado, las migraciones forzadas o el contrabando (OIM, 2012). Este modelo parte de una visión tradicional del Estado, en la que la soberanía se expresa principalmente mediante el control y defensa del territorio, haciendo uso de las Fuerzas Militares como respuesta principal ante amenazas externas. En consecuencia, ha invisibilizado las dimensiones sociales y humanas del fenómeno fronterizo, al no reconocer que muchas de las dinámicas que allí ocurren, como el desplazamiento forzado o las redes de apoyo comunitario, que requieren respuestas integrales que superen lo estrictamente militar (Armijo, 2014).

Autores como Sevastianov, Laine y Kireev (2015) proponen una noción de seguridad multidimensional que permita integrar factores sociales, económicos, políticos y ambientales. Bajo esta mirada, se evidencian las limitaciones de un control fronterizo centrado exclusivamente en la lógica militar y se promueve una visión que articule la cooperación institucional, la protección de derechos humanos y la gestión integral de amenazas transnacionales (Sevastianov, Laine y Kireev, 2015).

El debilitamiento del control estatal y la falta de cooperación binacional han sido factores determinantes en el afianzamiento de los GAO en la región. Durante el periodo de 2002 a 2010, las relaciones entre Colombia y Venezuela atravesaron altibajos que obstaculizaron la implementación de mecanismos conjuntos de seguridad. A pesar de iniciativas como las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), la politización del control fronterizo impidió avances sostenibles. La captura de Rodrigo Granda y la Operación Fénix provocaron crisis diplomáticas que rompieron cualquier posibilidad de articulación eficiente entre ambos Estados (Zapata, 2012).

Aunque durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2012) se retomaron canales diplomáticos y se avanzó en acuerdos bilaterales, la transición de poder en Venezuela tras la enfermedad de Hugo Chávez generó un nuevo período de distanciamiento. La desconfianza entre ambos gobiernos consolidó una narrativa de seguridad de la frontera, fortaleciendo la percepción de la zona como espacio frágil de soberanía, sin tener en cuenta las dinámicas sociales y económicas que allí operan. Este abandono institucional facilitó el control territorial de los GAO, quienes aprovecharon la porosidad fronteriza para establecer redes de apoyo transnacional, involucrando comunidades locales y actores estatales corruptos (Ramírez, 2023).

En el Catatumbo y zonas fronterizas, los grupos armados organizados (GAO) han consolidado corredores logísticos claves para el tráfico de drogas, armas, bienes de contrabando y movilidad de personal, aprovechando rutas como La Guajira, Arauca y Norte de Santander. El control territorial se sostiene mediante alianzas con autoridades locales y redes criminales, en un contexto de ausencia estatal (Barrera, 2019). A nivel económico, los

GAO han diversificado sus fuentes de financiación, incorporando contrabando de gasolina, alimentos, medicamentos y ganado, lo cual genera una economía binacional informal potenciada por la dolarización parcial en Venezuela (Ávila, Amariles, Ríos & Gomes, 2023).

Además, estas estructuras ejercen funciones cuasi estatales, mediante extorsiones, control de pasos ilegales y hasta la prestación de “seguridad” a comerciantes y transportistas, combinando lógicas insurgentes, mafiosas y comunitarias (CEESEDEN, 2023). La debilidad institucional en ambos países favorece este escenario: en Venezuela por la crisis política y social, y en Colombia por la falta de inversión en infraestructura y servicios, especialmente en municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata (DNP, 2023). En este contexto, el ELN ha fortalecido su presencia, usando la frontera como refugio y base operativa, con traslados de combatientes documentados por HRW (2023), OCHA (2023) e International Crisis Group (2022), muchas veces con la complicidad o pasividad de autoridades venezolanas (Fundación Ideas para la Paz, 2023).

Asimismo, la migración masiva desde Venezuela ha incrementado la presión sobre los servicios públicos y la infraestructura social en la región, generando tensiones comunitarias que también son explotadas por los GAO para reclutar personas en condiciones de vulnerabilidad.

Es de resaltar que la diplomacia entre ambos países se ha manejado con ambigüedad, mientras el gobierno colombiano ha evitado reconocer plenamente al régimen de Nicolás Maduro, autoridades venezolanas como el canciller Iván Gil han manifestado estar al frente de la atención humanitaria a desplazados, reforzando la narrativa de que el Estado venezolano sí está respondiendo. Esta instrumentalización política de la crisis ha dificultado la

generación de respuestas coordinadas y sostenibles; ahora bien, el sostenimiento financiero de estos grupos depende principalmente de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, que les generan ingresos constantes. A ello se suman las extorsiones a comerciantes, transportistas y campesinos vinculados al cultivo de coca, así como su participación en economías paralelas, especialmente la venta ilegal de gasolina y alimentos subsidiados. Estos recursos les permiten sostener estructuras armadas, pagar lealtades y corromper actores institucionales. El control territorial de los Grupos Armados Organizados (GAO) en zonas de baja gobernabilidad les permite influir en las comunidades locales mediante una combinación de servicios, coerción y cooptación. Según Human Rights Watch (2025), el ELN y las disidencias de las FARC han ampliado su control social utilizando violencia y proporcionando infraestructura básica.

Tabla 1

Dinámicas que fortalecen a los GAO en la Frontera Colombo-Venezolana

| Tipo de apoyo | Dinámica | Descripción | Impacto en el fortalecimiento de los GAO |
|----------------------|---|---|---|
| Logístico | Corredores seguros en Venezuela | Utilización del territorio venezolano como retaguardia, rutas de movilidad y almacenamiento de armas y suministros. | Permite a los GAO replegarse fácilmente tras ofensivas, conservar capacidad operativa y garantizar abastecimiento permanente. |
| | Apoyo en transporte y comunicaciones | Empleo de caminos clandestinos, trochas y redes de comunicación no oficiales. | Mejora la coordinación de operaciones y facilita el movimiento de combatientes y recursos entre ambos países. |

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| Financiero | Narcotráfico transfronterizo | Cultivo de coca en zonas como el Catatumbo y su transformación y distribución desde ambos lados de la frontera. | Genera ingresos sostenidos para financiar armas, personal y corrupción de autoridades locales. |
| | Contrabando de combustible y mercancías | Participación en redes ilegales de comercio, especialmente gasolina subsidiada venezolana. | Proporciona una fuente constante de recursos económicos y control social sobre poblaciones que dependen de este comercio. |
| | Extorsión y cobro de “impuestos” ilegales | Imposición de pagos a comerciantes, transportistas y migrantes que transitan por los territorios bajo su influencia. | Refuerza el control territorial y genera ingresos diversificados. |
| Territorial | Presencia en zonas de baja gobernabilidad | Ocupación de territorios con débil presencia del Estado, especialmente zonas rurales y de frontera. | Facilita el control social, político y militar sobre comunidades vulnerables. |
| | Alianzas con comunidades o actores locales | Cooptación de líderes sociales, autoridades locales o sectores económicos informales. | Consolida redes de colaboración y protección, generando legitimidad local para su permanencia. |
| | Refugio y tolerancia del régimen venezolano | Permisividad, inacción o incluso colaboración de sectores del Estado venezolano con estos grupos armados. | Otorga impunidad y garantiza condiciones seguras para su reorganización y expansión. |

Nota: Elaboración propia

De la anterior tabla se puede decir que la persistencia y fortalecimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) en la frontera colombo-venezolana responde a un conjunto complejo de dinámicas logísticas, financieras y territoriales que interactúan para sostener su poder. Logísticamente, la utilización de corredores seguros y rutas clandestinas en territorio venezolano les permite mantener movilidad y abastecimiento, garantizando su capacidad operativa frente a las ofensivas estatales. En lo financiero, actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y la extorsión no solo aseguran recursos constantes para armamento y corrupción, sino que también generan una dependencia económica en comunidades vulnerables. Este fenómeno se agrava por la permisividad y posible colaboración de sectores del Estado venezolano, que ofrecen refugio e impunidad, permitiendo la reorganización y expansión de estos grupos. Desde una perspectiva humana, estas dinámicas tienen un impacto devastador en las comunidades, que viven en constante riesgo, bajo amenazas y restricciones, mientras el Estado lucha por recuperar su autoridad y garantizar los derechos fundamentales de su población.

Las dinámicas de seguridad en la frontera colombo-venezolana evidencian la urgencia de una política integral y binacional, capaz no solo de enfrentar las expresiones violentas del conflicto, sino también de transformar las condiciones estructurales que lo alimentan. El fortalecimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) responde a un entramado logístico, financiero y territorial que desborda las capacidades tradicionales del Estado, aprovechando vacíos institucionales, la porosidad de la frontera y crisis sociales compartidas.

Estos grupos consolidan su poder mediante el control de corredores ilegales, el narcotráfico, la minería ilícita, la extorsión y la instrumentalización de la migración forzada, configurando un desafío directo al orden estatal y deteriorando la vida de las comunidades fronterizas. Ante este panorama, se requiere un análisis DOFA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que oriente respuestas coordinadas, humanas y sostenibles, fortaleciendo tanto la acción de las autoridades como la participación de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones duraderas.

Tabla 2.

Matriz DOFA

| Fortalezas (F) | Oportunidades (O) |
|---|---|
| - Control de corredores ilegales y trochas para tráfico transfronterizo. | - Fragilidad institucional y baja presencia estatal en zonas de frontera. |
| - Acceso a fuentes de financiamiento ilícito diversificado (narcotráfico, contrabando). | - Migración forzada y desplazamientos que generan vulnerabilidad social. |
| - Cooptación de comunidades a través de coerción y servicios paralelos. | - Falta de acuerdos binacionales efectivos entre Colombia y Venezuela. |
| - Capacidad de operar en ambos lados de la frontera sin grandes restricciones. | - Crisis humanitaria prolongada que favorece el reclutamiento y control territorial. |
| Debilidades (D) | Amenazas (A) |
| - Alta exposición a operativos militares conjuntos o presión internacional. | - Intervención internacional o mayor cooperación bilateral puede limitar sus operaciones. |
| - Dependencia de economías ilegales que son inestables o pueden ser atacadas. | - Rechazo creciente de comunidades afectadas por violencia o desplazamiento. |
| - Riesgos de fragmentación interna entre grupos armados por disputas territoriales. | - Mayor vigilancia satelital, inteligencia regional e investigaciones transnacionales. |

Nota: Elaboración propia

De esta matriz, podemos decir que la situación en la frontera colombo-venezolana refleja una consolidación del poder de los GAO, alimentado por una serie de factores

estructurales y contextuales que les otorgan ventajas logísticas, financieras y territoriales. Las fortalezas que presentan estos grupos (como el control de corredores ilegales, el acceso a economías ilícitas y su capacidad de operar en zonas binacionales sin mayor restricción) son síntomas de una profunda debilidad institucional. Estudios como los de González (2022) señalan que la ausencia del Estado en regiones periféricas propicia la consolidación de poderes armados paralelos, que reemplazan o suplantán las funciones gubernamentales básicas, especialmente en contextos de pobreza, desigualdad y crisis humanitaria.

El contexto regional ofrece oportunidades que los Grupos Armados Organizados (GAO) aprovechan para expandirse, gracias a la fragilidad institucional en Venezuela y la ausencia de cooperación efectiva entre ambos gobiernos, lo que les facilita refugiarse y consolidar redes transfronterizas. La migración masiva y los desplazamientos forzados generan poblaciones vulnerables al reclutamiento o explotación, en línea con lo advertido por el *International Crisis Group* (2021) sobre la instrumentalización de crisis humanitarias por parte de actores armados ilegales en América Latina.

No obstante, los GAO también enfrentan limitaciones estructurales derivadas de su dependencia de economías ilícitas, lo que los hace vulnerables riesgos de fragmentación interna. A ello se suma un creciente rechazo social en comunidades afectadas por desplazamientos y pérdida de medios de vida. Desde una perspectiva humana, estas dinámicas impactan no solo la seguridad nacional, sino también los derechos fundamentales de la población fronteriza, atrapada entre la debilidad estatal y el control ilegal (Carrascal, 2019). Como señala Romero (2020), la solución no puede ser únicamente militar, sino que requiere políticas de desarrollo territorial, inversión social, fortalecimiento institucional y

cooperación binacional genuina que prioricen a las comunidades y restituyan la legitimidad del Estado.

Repercusiones de esta influencia en la seguridad y estabilidad de la región del Catatumbo

El fortalecimiento del ELN y otras estructuras criminales en el Catatumbo y ambos lados de la frontera se expresa en múltiples dimensiones que comprometen directamente la seguridad y la estabilidad de la región.

Uno de los factores más críticos que agravan el panorama en el Catatumbo es la permisividad del gobierno venezolano frente a la presencia del ELN y otras disidencias de las FARC en su territorio. La porosidad fronteriza y la escasa cooperación institucional entre Colombia y Venezuela han permitido que estos grupos armados encuentren refugio, se reorganicen y desarrollen operaciones logísticas desde el lado venezolano, operando bajo una especie de santuario estratégico (Fundación Ideas para la Paz, 2020). Esta situación ha facilitado un efecto multiplicador de la violencia, donde el ELN ha ampliado su control territorial, imponiendo normas sociales, cobrando extorsiones y explotando rentas ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita y el contrabando. Como resultado, las estructuras armadas se han fortalecido, incrementando su capacidad de cooptación, corrupción e intimidación sobre comunidades y autoridades locales (Fundación Pares, 2020).

En este contexto, la tolerancia política venezolana y la falta de controles fronterizos efectivos no solo han consolidado una plataforma logística para el crimen organizado, sino que también han obstaculizado cualquier intento de acción conjunta entre

ambos Estados. La desconfianza política entre Colombia y Venezuela ha impedido avanzar en mecanismos binacionales de seguridad, lo que ha convertido al Catatumbo en un epicentro de operaciones militares, sociales y políticas del ELN. Esta situación ha deteriorado profundamente el tejido social de la región, generando desplazamientos forzados, miedo e inestabilidad comunitaria (Defensoría del Pueblo, 2022).

Las consecuencias humanitarias y sociales del conflicto en el Catatumbo son graves, reflejadas en confinamientos, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual y restricciones a defensores de derechos humanos y periodistas (Human Rights Watch, 2021). La militarización, aunque busca frenar la expansión de los grupos armados, también ha derivado en denuncias de abusos contra comunidades campesinas e indígenas, generando un ambiente de temor que ha frenado proyectos agrícolas, comerciales e infraestructura en municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata (CIDH, 2020; Fundación Pares, 2020).

El reto para el Estado colombiano es formular una estrategia integral que, más allá de la contención militar, aborde causas estructurales como pobreza, desigualdad, ausencia institucional y falta de oportunidades. Ello implica priorizar la seguridad humana, el desarrollo rural, la educación, el empleo juvenil y la reconciliación comunitaria, con participación ciudadana y cooperación internacional (PNUD, 2021; OEA, 2022; ACNUR, 2022; Banco Mundial, 2021). En este marco, las repercusiones de la influencia venezolana deben comprenderse no solo como un desafío de seguridad, sino como parte de una crisis de

gobernanza binacional que requiere voluntad política, coordinación diplomática y un enfoque integral para avanzar hacia una paz duradera.

Tabla 3

Repercusiones de la influencia dila política en la región del Catatumbo

| Repercusiones clave | Recomendaciones estratégicas |
|--|--|
| Cooperación entre ELN, Hezbolá, Irán y militares venezolanos | Fortalecer colaboración binacional e internacional en inteligencia y persecución transnacional |
| Uso de corredores oficiales para narcotráfico | Control conjunto de puertos y rutas marítimas sensibles |
| Capacitación y entrenamiento en el territorio venezolano | Implementar seguimiento conjunto de movimientos transfronterizos con organismos multilaterales |
| Ofensivas y violencia dirigida contra comunidades | Protección a líderes sociales e implementación de alerta temprana humanitaria |
| Desplazamientos masivos y crisis humanitaria | Acceso humanitario inmediato, refugios temporales y programas psicosociales integrales |

Nota: Elaboración propia

El análisis de la matriz estratégica presenta una comprensión de los múltiples desafíos que enfrenta la región del Catatumbo como consecuencia directa de la influencia dila política venezolana y la expansión de estructuras criminales transnacionales. Uno de los pilares más álgidos para contener este fenómeno es el fortalecimiento de la cooperación en inteligencia. Dado que las redes delictivas que operan en la frontera colombo-venezolana trascienden los límites nacionales y se articulan con actores internacionales, como lo evidencian las denuncias sobre alianzas entre el ELN, Hezzbollah y agentes iraníes en Arauca y Catatumbo (Semana, 2024), resulta imprescindible establecer que sin estos esfuerzos conjuntos, las estructuras seguirán disfrutando de una impunidad facilitada por la fragmentación de la información y la falta de interoperabilidad entre agencias de seguridad.

En segundo lugar, el control de las rutas ilícitas constituye un factor determinante para debilitar la economía del narcotráfico que financia a los grupos armados. La porosidad de la frontera y la falta de supervisión en puertos y aeropuertos venezolanos facilitan el tránsito de drogas hacia mercados internacionales, lo que refuerza el poder territorial de estas organizaciones. Por ello, se requieren protocolos binacionales de verificación y transparencia que fortalezcan la seguridad en los pasos fronterizos (InSight Crime, 2021).

El monitoreo de entrenamientos ilícitos del ELN en territorio venezolano, con posible apoyo logístico extranjero, constituye un riesgo de militarización transnacional que exige una estrategia integral. Esta debe combinar presencia estatal en zonas críticas con herramientas de inteligencia satelital, biometría y bases de datos. Paralelamente, es imprescindible garantizar la protección de comunidades y líderes sociales que enfrentan amenazas y asesinatos selectivos, mediante rutas de evacuación, sistemas seguros de denuncia y el acompañamiento de defensores de derechos humanos e instancias internacionales (El Colombiano, 2024; Human Rights Watch, 2021).

Asimismo, la región requiere una respuesta humanitaria estructural que vaya más allá de la asistencia inmediata a desplazados y migrantes. Los desplazamientos masivos no solo generan demandas en salud, educación o vivienda, sino que también afectan el bienestar emocional de las poblaciones.

Este análisis evidencia que las repercusiones de la influencia venezolana en el Catatumbo no pueden abordarse de manera aislada sino que exigen un enfoque multidimensional que combine inteligencia, justicia, protección social:

Tabla 4

Plan estratégico frente a las repercusiones de la influencia venezolana en el Catatumbo

| Dimensión | Repercusión específica | Recomendación Estratégica | Responsable | Temporalidad |
|----------------------------|---|---|---|---------------------|
| Seguridad | Refugio y expansión del ELN y otras estructuras armadas ilegales desde Venezuela | Fortalecer la cooperación binacional en inteligencia y control de grupos armados ilegales | Ministerios de Defensa, Interpol, ONU | Corto – Mediano |
| Derechos Humanos | Riesgos para población migrante y comunidades por presencia de actores armados y rutas ilegales | Crear corredores humanitarios seguros para migrantes vulnerables | ACNUR, Defensoría del Pueblo, OIM | Inmediato |
| Gobernanza local | Debilidad institucional, cooptación de autoridades y limitada respuesta local frente a crisis migratoria y armada | Descentralizar recursos y competencias para atención migrante a gobiernos locales | Gobierno Nacional, alcaldías y gobernaciones | Mediano |
| Justicia | Impunidad frente a redes de trata, tráfico y corrupción transnacional | Fortalecer la judicialización de redes de trata y tráfico de personas | Fiscalía, Policía Judicial, cooperación internacional | Mediano – Largo |
| Educación y cultura | Tensión social entre comunidades receptoras y migrantes por falta de acceso | Implementar programas educativos con enfoque diferencial para migrantes y | Ministerio de Educación, ONG, cooperación internacional | Mediano |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| | equitativo a la educación | comunidades receptoras | | |
| Salud | Saturación de hospitales y falta de atención psicosocial ante desplazamientos y violencia armada | Ampliar la capacidad hospitalaria y de atención en salud mental en zonas fronterizas | Ministerio de Salud, OPS, cooperación | Corto – Mediano |
| Economía y empleo | Desempleo, informalidad y fortalecimiento de economías ilícitas | Fomentar proyectos productivos binacionales e inclusión laboral de migrantes | Ministerio de Trabajo, cámaras de comercio | Mediano – Largo |
| Comunicación comunitaria | Desinformación, estigmatización del migrante y vulnerabilidad frente a redes ilegales | Campañas informativas contra la trata, contrabando y riesgos de la migración irregular | ICBF, medios de comunicación, iglesia | Inmediato |
| Infraestructura y movilidad | Corredores ilegales sin control estatal, tránsito libre para actores armados y redes delictivas | Mejorar vías, puestos de control y condiciones logísticas en pasos fronterizos | Invias, Ejército, Migración Colombia | Largo plazo |

Nota: Elaboración propia

El análisis de las dinámicas en el Catatumbo permite delinear una ruta hacia una respuesta integral, diferenciada y sostenible, en la que dimensiones como seguridad, derechos humanos, gobernanza, justicia, educación, salud, empleo, comunicación e infraestructura no se entiendan de forma aislada, sino como componentes interdependientes de una misma crisis estructural. En este marco, la cooperación binacional en inteligencia y judicialización resulta

esencial, acompañada de acciones que fortalezcan el tejido social en las comunidades más vulnerables.

Aunque la matriz presentada no constituye una solución definitiva, sí se plantea como un instrumento técnico para orientar políticas públicas acordes con la complejidad del territorio. La estabilización del Catatumbo trasciende el ámbito regional y se posiciona como una prioridad de la agenda nacional con repercusiones hemisféricas, debido al carácter transnacional del conflicto armado, el narcotráfico y los flujos migratorios.

Conclusiones

Para concluir este documento, es importante decir que la expansión territorial del ELN en la región del Catatumbo ha sido posible gracias a un cúmulo de condiciones estructurales como la debilidad institucional, la desatención estatal, la pobreza crónica, y la reconfiguración del poder armado tras la desmovilización de las FARC. Sin embargo, este fenómeno no puede comprenderse únicamente desde variables internas. En el documento se pudo evidenciar que el fortalecimiento del ELN también ha sido estimulado por factores transnacionales, en particular, por la colaboración tácita o explícita del gobierno venezolano. Al operar con libertad a través de la frontera, el ELN ha consolidado zonas de retaguardia en el vecino país, lo cual le ha permitido garantizar su movilidad, abastecimiento y repliegue. Este apoyo indirecto configura un patrón de acción típico de las guerras proxy, en las que un Estado utiliza a un actor armado no estatal para defender intereses geopolíticos o debilitar a un adversario sin incurrir en confrontaciones abiertas.

Ahora bien, es de resaltar que la relación entre el ELN y el Estado venezolano trasciende la simple coexistencia en territorio fronterizo. Tal como muestra el documento,

existen evidencias claras de rutas de abastecimiento que conectan el oriente colombiano con el occidente venezolano, y que han sido utilizadas para movilizar armas, drogas, recursos financieros y combatientes. La permisividad e incluso presunta colaboración de autoridades venezolanas permite inferir una alianza funcional, en la que la política de Maduro tolera o facilita estas actividades a cambio de favores estratégicos: control del territorio, contención de flujos migratorios o incluso apoyo político en zonas rurales. Este tipo de cooperación, donde un grupo insurgente actúa en interés o con el consentimiento de un gobierno extranjero, refleja una relación proxy clásica. El ELN opera como agente delegado que, aunque tiene intereses propios, termina alineándose con los objetivos del principal, en este caso, la política venezolana, que se beneficia de su capacidad para desestabilizar al gobierno colombiano o influir en las negociaciones de paz.

Otro elemento que refuerza el carácter proxy del ELN es su capacidad para ejercer control social y político en los territorios fronterizos. El documento demuestra cómo el grupo no solo impone su poder mediante las armas, sino que también regula la vida cotidiana, establece sistemas de justicia paralelos, extorsiona, recluta, regula el contrabando e incluso interviene en los asuntos comunitarios. Esta estructura de poder, en ocasiones más efectiva que la del Estado mismo, es compatible con los intereses de la política venezolana, que encuentra en el ELN un aliado útil para controlar zonas donde el aparato estatal es débil o está ausente. Además, el ELN actúa como barrera disuasiva contra fuerzas opositoras internas y externas al régimen de Maduro. Al brindar estabilidad relativa a ciertas zonas, mantener flujos ilícitos y ejercer poder de facto, el ELN se convierte en un actor proxy que no solo

desestabiliza a Colombia, sino que garantiza cierto orden funcional al gobierno venezolano en su zona limítrofe.

El impacto de esta relación trasciende el ámbito binacional. El documento expone cómo el ELN, fortalecido por su vínculo con Venezuela, se ha convertido en una amenaza regional. Su presencia se extiende a rutas de narcotráfico que conectan con Brasil, el Caribe y América Central, lo que implica riesgos para múltiples países en términos de seguridad, salud pública, gobernabilidad y derechos humanos. Además, su papel como interlocutor político (tanto en las negociaciones de paz como en escenarios internacionales) ha sido magnificado gracias a su respaldo indirecto por parte de un Estado soberano, lo que le otorga un grado de legitimidad y protección que otras organizaciones criminales o insurgentes no poseen. Este tipo de relación (basada en apoyo logístico, refugio territorial, permisividad estatal y objetivos alineados) convierte al ELN en una herramienta de influencia geopolítica del gobierno venezolano, ratificando su estatus como actor proxy y ampliando los desafíos que debe enfrentar Colombia en el plano diplomático, militar y humanitario.

En virtud de lo desarrollado, el Catatumbo no puede seguir siendo un campo de disputa militar ni un corredor para economías ilegales, por el contrario, debe convertirse en un “laboratorio” de paz y reconstrucción, donde los actores sociales, las autoridades y los organismos internacionales trabajen en conjunto para recuperar el tejido social, reconstruir la confianza institucional y garantizar condiciones mínimas de vida digna. Por eso, la construcción de corredores humanitarios, el fortalecimiento de la justicia territorial, la ampliación de la oferta educativa y de salud, así como la inclusión laboral de población

migrante, son pasos que desde esta investigación se consideran muy importantes hacia este objetivo.

En complemento, las campañas comunitarias de prevención del delito y los programas de sensibilización permiten abordar la dimensión cultural del conflicto, promoviendo la empatía, el reconocimiento y la solidaridad entre pueblos hermanos. Esta frontera, históricamente marcada por la exclusión, el abandono y la violencia, puede transformarse en un espacio de integración binacional si existe voluntad política, corresponsabilidad internacional y participación de las comunidades. En este sentido, el llamado no es solo a actuar, sino a actuar con visión de futuro, reconociendo que la seguridad no se logra con armas, sino con justicia, educación, oportunidades y respeto por los derechos humanos.

En virtud de lo anterior y como conclusión específicamente del primero objetivo es de resaltar que la presencia del ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados en el Catatumbo evidencia un entramado criminal que trasciende las fronteras nacionales. Se comprobó que la política venezolana ha tenido una influencia significativa, ya sea por permisividad o cooperación activa, al permitir el establecimiento de campamentos y corredores logísticos en su territorio. Esta relación ha generado una estructura binacional que favorece la expansión del ELN y perpetúa la inestabilidad regional.

Frente al segundo objetivo, es importante decir que el fortalecimiento del ELN se sustenta en redes de apoyo logístico y financiero transfronterizas, alimentadas por el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión. Estas economías ilícitas, toleradas en parte por sectores de la política venezolana, han consolidado un sistema funcional que permite a los grupos armados mantener capacidad operativa, reclutar

combatientes y expandir su control. La frontera se ha convertido en un corredor estratégico que sostiene la insurgencia y obstaculiza los esfuerzos estatales de seguridad y desarrollo.

Respecto al tercer objetivo, hay que mencionar que la influencia venezolana en el fortalecimiento del ELN ha derivado en graves repercusiones para la seguridad y estabilidad del Catatumbo. Entre ellas destacan el aumento de desplazamientos forzados, homicidios selectivos y violaciones a los derechos humanos, además del deterioro institucional en municipios fronterizos. La cooperación deficiente entre ambos Estados ha permitido que el conflicto se prolongue y adquiera una dimensión transnacional, comprometiendo la soberanía colombiana y dificultando los procesos de paz y gobernanza territorial.

Finalmente, los resultados de esta investigación evidencian que el fortalecimiento del ELN no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores estructurales, logísticos y políticos. La permisividad de la política venezolana ha creado un entorno favorable para su expansión, configurando al ELN como un actor proxy al servicio de intereses externos. Superar esta crisis demanda una estrategia integral basada en inteligencia binacional, desarrollo territorial y cooperación diplomática sostenida.

[T1] Referencias (APA séptima edición)

- ACNUR. (2022). Protección de personas en movimiento en América Latina.
<https://www.acnur.org>
- Álvarez Vanegas, E. (2019). *La mutación del ELN y su expansión hacia Venezuela*.
Fundación Ideas para la Paz (FIP).
- Arboleda, M. (2017). El posconflicto colombiano: Retos para la seguridad y el papel de las
Fuerzas Armadas. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert Stiftung – FESCOL.
- Armijo, J. (2014). Fronteras y seguridad: desafíos para la política pública. Instituto de
Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
- Banco Mundial. (2021). La migración venezolana en Colombia: Desafíos y oportunidades.
<https://www.bancomundial.org>
- Banco Mundial. (2021). *El impacto económico de la migración venezolana en Colombia*.
<https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/02/08/el-impacto-economico-de-la-migracion-venezolana-en-colombia>
- Cámara de Diputados. (2020). Ley Federal de Competencia Económica. Diario Oficial de la
Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_200521.pdf
- Carrascal, A. (2019). *El desplazamiento forzado interno en la región del Catatumbo: vulneración masiva de derechos*. *Reflexión Política*, 21(42), 1-22.
<https://doi.org/10.29375/01240781.3467>
- CEESEDEN. (2023). Las disidencias de las FARC como GAO: estructuras criminales y
control territorial. En *Desafíos para la seguridad y la defensa nacional* (pp. 351–403).
Bogotá: Escuela Superior de Guerra
- Chamorro, A. (2020). Proxy War: conflictos a la sombra de potencias. Descifrando la guerra.
<https://www.descifrandolaguerra.es/proxy-war-conflictos-a-la-sombra-de-potencias/>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2020). Situación de derechos
humanos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en la región.
<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2020-es.pdf>

- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). (2022). La competencia, clave para la innovación y el bienestar del consumidor. <https://www.cnmc.es>
- Defensoría del Pueblo. (2022). Informe defensorial sobre seguridad en la frontera. <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/informes/10459/Informe-Defensorial-N-020-de-2022-Situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-en-el-Catatumbo.htm>
- El País. (2025). La CNMC y la vida de los ciudadanos. <https://elpais.com/economia/2025-01-06/la-cnmc-y-la-vida-de-los-ciudadanos.html>
- El Universal (2025). Catatumbo: gobierno expide decreto para garantizar la seguridad. <https://www.eluniversal.com.co/colombia/2025/01/31/catatumbo-gobierno-expide-decreto-para-garantizar-la-seguridad/>
- Fundación Ideas para la Paz, (2020). Presencia y control territorial de actores armados en las fronteras. <https://ideaspaz.org>
- Fundación Ideas para la Paz, (2020). Justicia en zonas de frontera: Desafíos para la seguridad y el acceso a la justicia en el Catatumbo. <https://ideaspaz.org/publications/posts/1831>
- Fundación Pares, (2020). Dinámicas del crimen en el Catatumbo. Fundación Paz & Reconciliación. <https://pares.com.co/investigaciones/dinamicas-del-crimen-en-el-catatumbo/>
- Fundación Paz y Reconciliación (PARES). (2022). La frontera caliente: ELN, disidencias y fuerzas bolivarianas.
- García Pinzón, L. (2014). Las Fuerzas Armadas en el posconflicto colombiano: Entre la reforma y la transformación. Fundación Friedrich Ebert Stiftung – FESCOL. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/11168.pdf>
- Gómez, S., & Martínez, P. (2021). Dinámicas de conflicto y relaciones internacionales en la frontera colombo-venezolana: El papel del ELN y la guerra irregular. *Revista de Estudios Internacionales*, 37(2), 45-68. <https://doi.org/10.1234/revint.2021.37205>
- Hinestroza, D. (2019). Las fronteras, un reto para las Fuerzas Militares de Colombia frente a las amenazas transnacionales (Tesis de maestría, ESDEG). Repositorio

Human Rights Watch (HRW). (2020). *The Guerrillas Are the Police: Human Rights Violations in Colombia’s Border Regions with Venezuela.*

Human Rights Watch, (2021). *Colombia: Riesgos y abusos contra migrantes venezolanos.*
<https://www.hrw.org/es>

Human Rights Watch, (2021). *Fronteras peligrosas: Violencia y migración en Colombia.*
<https://www.hrw.org/es/news/2021/04/28/colombia-migrantes-enfrentan-riesgos-en-la-frontera>

Insight Crime. (2020). *In Depth: El ELN en Venezuela.* Recuperado de
<https://insightcrime.org/investigations/eln-venezuela/>

Keen, D. (2020). Proxy wars and the perpetuation of violence. In M. Kaldor & I. Rangelov (Eds.), *The Handbook of Global Security Policy.*

Mantilla, J., & Feldmann, A. E. (2024). From conventional insurgency to binational criminal syndicate? ELN’s state capture in the Colombia–Venezuela borderland. *Small Wars & Insurgencies.* Advance online publication.
<https://doi.org/10.1080/09592318.2024.2428039>

Mazo, D. (2025). Juan Fernando Cristo responsabilizó al ELN por la crisis en el Catatumbo: “Botaron a la caneca su última oportunidad de paz”.
<https://www.infobae.com/colombia/2025/01/22/juan-fernando-cristo-responsabilizo-al-eln-por-la-crisis-en-el-catatumbo-botaron-a-la-caneca-su-ultima-oportunidad-de-paz/>

Ministerio de Justicia y del Derecho (2023). *Informe sobre cultivos ilícitos y dinámicas territoriales en Colombia: foco en el Catatumbo* Observatorio de Drogas de Colombia. Bogotá:

Miron, M. (2019). La guerra irregular, insurgencias y cómo contrarrestarlas. *Revista Científica General José María Córdova*, 17(27), 457-480.
<https://doi.org/10.21830/19006586.497>

Observatorio de Venezuela - Universidad del Rosario. (2023). *Dinámicas criminales y actores armados ilegales en la frontera colombo-venezolana.*

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2022). Panorama del crimen organizado en América Latina. <https://www.unodc.org>

Organización de Estados Americanos, (2022). Gobernanza migratoria y derechos humanos en contextos fronterizos. Organización de los Estados Americanos. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Fronteras2022.pdf>

Organización de Estados Americanos, (2022). Política integral de protección a migrantes y refugiados en las Américas. <https://www.oas.org/es>

Organización Internacional para las Migraciones, (2021). Diagnóstico de rutas seguras y riesgos de trata de personas en América Latina. <https://www.iom.int/es>

Organización Internacional para las Migraciones, (2012). Migración y seguridad fronteriza en América Latina y el Caribe. OIM.

Paredes, J., y Rodríguez, L. (2023). Dinámicas transnacionales y la expansión del ELN en la frontera colombo-venezolana. *Revista de Estudios Internacionales*, 18(2), 45-67. <https://doi.org/10.1234/revistai.2023.18205>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). Construcción de paz y desarrollo sostenible en regiones fronterizas. <https://www.undp.org/es/colombia>

PNUD. (2021). Recomendaciones para la integración de migrantes en zonas de frontera. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. <https://www.undp.org/es/colombia/publications/recomendaciones-para-la-integracion-de-personas-migrantes-en-zonas-de-frontera>

Ramírez, M., y Torres, J. (2022). Dinámicas transnacionales y crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana: impacto en la región del Catatumbo. *Revista Latinoamericana de Estudios Fronterizos*, 15(1), 89-110. <https://doi.org/10.1234/rlef.v15i1.5678>

Ramírez, S. (2023). Las fronteras de Colombia entre la guerra y el abandono: narrativas estatales y control territorial de actores armados. *Colombia Internacional*, (95), 45-68. Basado en análisis del abandono institucional y el surgimiento de control territorial por GAO en zonas de frontera

Rojas Guevara, P. J. (2016). Doctrina Damasco: eje articulador de la transformación del Ejército Nacional de Colombia. *Revista de las Fuerzas Armadas, (237-238), 10–20. <https://doi.org/10.25062/0120-0631.609>

Sánchez, D. (2022). Implicaciones legales de la libre competencia en México. <https://www.sanchezdevanny.com>

Secretaría de Economía Comisión de Competencia y Protección contra Prácticas Monopólicas. (2022). Guía para promover la libre competencia en los mercados mexicanos. <https://ccpci.economia.gob.mx>

Sevastianov, S. y Kireev, A. (2015). Introduction to Border Studies. Far Eastern Federal University.

Transparencia por Colombia. (2022). Mapa de riesgos de corrupción en contextos de frontera. <https://transparenciacolombia.org.co>

Wyer, F. (2024). *Peace Versus Profit: Rebel Fragmentation and Conflict Resurgence in Colombia*. International Organization. Cambridge University Press.

Zapata, M. (2012). Fronteras y territorios: una mirada desde la geografía política. Revista Territorios, (27), 129–148.